

LOS GENERALES DE CHILE

TRES militares ocupan desde el 2 de noviembre —la fecha del segundo aniversario de la llegada al poder de Allende y el Gobierno de Unión Popular— Ministerios clave en un nuevo Gobierno. Pertenecen a cada uno de los Ejércitos —Tierra, Mar y Aire—, y no por casualidad: esto indica que participan en el Gobierno no como políticos ni como técnicos, sino precisamente como militares, con representación militar. Es decir, que su inclusión en el Gobierno es la consecuencia de un pacto. El contraalmirante Ismael Huerta es ministro de Obras Públicas, el general Claudio Sepúlveda, del Ejército del Aire, es ministro de Minas; el puesto más importante es el que ocupa el general en jefe del Ejército chileno, Carlos Prats: ministro del Interior (que no por ello abandona su puesto militar: el general Augusto Pinochet le sustituye sólo a título de interino). El Ministerio del Interior no solamente es el encargado de mantener el orden público, cuestión de primerísima importancia en plena crisis precisamente de orden público, sino que además su titular es el segundo hombre del régimen: el encargado de suceder a Allende en caso de desaparición (no hay Vicepresidencia en la República de Chile).

¿CUALES pueden ser las bases del pacto, si lo hay, entre el Gobierno y el Ejército? Teórica y tradicionalmente, el Ejército de Chile es neutral. No exageremos esa teoría: el general Schneider fue asesinado —por la extrema derecha— poco después de las elecciones, el general Viala fue encarcelado tras preparar e intentar con otros jefes militares un golpe militar contra la Unidad Popular. Por otra parte, la palabra «neutralidad» es en estos momentos vaga, puede ser muy abusiva en cualquier sentido. La neutralidad militar puede ser el apoyo al poder establecido legalmente, sea cual sea ese poder, contra cualquier clase de subversión. Para lo cual no necesita ocupar carteras ministeriales, y menos la del Interior. Pero por neutralidad podría también entenderse quedar equidistante entre dos fuerzas que en este momento se enfrentan con bastante violencia: si una de ellas representa la legalidad, considerarse equidistante entre las dos podría suponer ya una cierta reserva, una cierta reticencia con respecto a esa legalidad; una garantía para la oposición, dentro del propio Gobierno. Si el general Prats consigue disolver la situación social desde el Ministerio de Información, negociando con las fuerzas de la derecha, que tienen la iniciativa de las huelgas y los desórdenes, habrá conseguido alejar la amenaza de una guerra civil, no se sabe a cambio de qué concesiones. Si no lo consigue, tendrá que reprimir por la fuerza los desórdenes, y habrá perdido su neutralidad. La situación está llena de riesgos por todas partes. Por eso,

Prats rechazó en el mes de mayo la oferta de Allende de incluir, entonces, dos o tres generales en el Gobierno. Y por eso una fracción importante de la Unidad Popular se oponía, y ha acogido con disgusto los nombramientos. Es precisamente el ala izquierda del partido de Allende, el socialista. Este grupo entendía que la inclusión de los militares era una concesión a las fuerzas subversivas, a los huelguistas de la derecha; se oponía desde el principio a cualquier forma de negociación y exigía la represión pura y simple. Por el contrario, el partido comunista era el principal portavoz de la alianza con los militares. El PC de Chile está desempeñando desde el principio de la coalición un papel moderador y templado. Tiene sus enemigos a la derecha —los tradicionales— y la izquierda —el MIR, los partidarios de la revolución armada y violenta como única forma de asentar el poder—; la tesis de los comunistas en esta cuestión es la de que los militares en el Gobierno, formando parte de él, no solamente son una garantía contra la derecha y la extrema derecha, sino también contra la extrema izquierda. Los militares deberían reprimir toda violencia y, por lo tanto, todo riesgo de guerra civil.

LA composición del nuevo Gobierno conserva más o menos las dosificaciones anteriores. Aparte de los tres ministros militares, cuatro son socialistas de Allende, tres son comunistas y los otros cinco —el Gobierno tiene quince ministros— están repartidos entre formaciones menores. Pero aun con esta misma dosificación política, y conservando ocho ministros del Gobierno anterior, la desaparición de cuatro ministros aparece también como una concesión a la derecha. Estos ministros, Jaime Suárez —del Interior—, Aníbal Palma —de Educación—, Chonchol —creador de la reforma agraria— y Carlos Matus —de Economía—, habían aparecido en una moción de censura en el Congreso por parte de la oposición: se les acusaba de «violación constante de la Constitución y de la ley». Fue la misma acusación que lanzaron hace unos meses contra otros dos ministros, José Toha y Hernán del Canto. Estos, sin embargo, figuran en el nuevo Gobierno: José Toha en el Ministerio, que podría ser clave, de Defensa —aunque la presencia de los tres oficiales generales en el Gobierno disminuya ahora su capacidad de acción— y Hernán del Canto, como interino, en la Secretaría del Gobierno. La limpieza de la «lista negra» planteada por la oposición es conciliadora, aunque se haya presentado como una sustitución constitucionalmente inevitable, incluso como la causa puramente mecánica de las crisis: estos ministros se querían presentar como candidatos a las elecciones para el Senado del mes de marzo y estaban obligados para





Después de formar nuevo Gobierno, en el que intervienen tres altos jefes del Ejército, el Presidente Allende se dirige al pueblo.

ello a no ocupar ningún cargo público desde cuatro meses antes: esto es, debían dimitir antes del 4 de noviembre.

ESTAS elecciones de marzo se consideran ahora como el punto clave de la política chilena inmediata. Aquí también juega un papel muy importante el nombramiento del general Prats para el Ministerio del Interior, puesto que es precisamente este Ministerio el que se encarga de las elecciones. Prats puede suponer una garantía de neutralidad para la oposición, que acusaba ya al Gobierno allendista de preparar trucos electorales; al mismo tiempo es una tranquilidad para el Gobierno, que puede contar con que si gana las elecciones será el propio jefe supremo del Ejército el que garantiza, con su responsabilidad, que se han efectuado legalmente, y no tolera ningún alzamiento por este motivo. En las elecciones se ponen en juego los 150 escaños del Congreso y la mitad (veinticinco) del Senado. Se van a presentar las dos coaliciones adversarias, cada una de ellas con su lista única: la Unidad Popular, gubernamental, frente a la nueva Confederación de la Democracia (la derecha), de la que es elemento decisivo la democracia cristiana: Eduardo Frei mismo se presenta a las elecciones, bajo esta etiqueta, para el Congreso. Una mayoría de la derecha, siendo sustancial, impediría prácticamente la existencia del actual Gobierno o la continuación de su obra social y política. En cambio, si la coalición gubernamental dominase el Congreso y el Senado, y estuviese respaldada por los militares como garantes de las elecciones y como servidores de la legalidad del régimen civil, la oposición sufriría un golpe probablemente definitivo. El resultado de las elecciones está muy lejos de poderse predecir en estos momentos. Las dos coaliciones se muestran seguras de ganarlas.

PERO hay temores de que otros acontecimientos pudieran producirse antes de las elecciones. ¿El recurso al Ejército no entraña un peligro de división del mismo Ejército? Algunos jefes han considerado que los militares no debían participar en el Gobierno. Son aquellos que personalmente se consideran incluidos, por sí mismos o por sus familias, en la derecha; los formados en las Escuelas Militares de Estados Unidos, que no conciben que un militar pueda sentarse a la misma mesa de Consejo que unos miembros del partido comunista, ni siquiera con los socialistas —no hacen, en realidad, muchas distinciones—. Hay también militares que son muy abiertamente simpatizantes con el régimen actual, como Guillermo Pickering, que manda la Segunda División, con guarnición en Santiago. Se dice que la mayor oposición al Gobierno en el seno del Ejército no procede precisamente de los generales o de los altos mandos, sino de los intermedios: de aquellos cuya forma de vida y sus familias pertenecen a las clases medias, a la burguesía, que nutre gran parte de la oposición (como es tradicional: es una clase tradicionalmente miedosa a perder sus pequeños privilegios al verse sumida en el pueblo). Es decir, que podría producirse una división grave en el mismo seno del Ejército, y que en el caso de tener que optar por la violencia habría militares que se enfrentasen a militares. Y esto sí que podría producir una guerra civil larga y sangrienta, sin final visible.

POR el momento, las noticias que llegan de la situación en sí indican una tendencia al apaciguamiento, y la celebración incesante de reuniones y conferencias para poner fin a las huelgas y a los disturbios. El general Prats ha anunciado que puede conseguir un apaciguamiento definitivo, y que abriría inmediatamente las negociaciones con los propietarios de camiones, que están en el origen de la ola de huelgas.

INDOCHINA

EL ALTO EL FUEGO NO ES LA PAZ

El retraso del alto el fuego en Indochina parece un lujo que se ha ofrecido Nixon ante la seguridad que le daban los cálculos electorales. Algo de excelente efecto y que incluso también podría tenerlo en la votación: Nixon no se precipita a hacer la paz por ganar votos, no se apresura a tomar medidas de urgencia, sino que pone el interés nacional —y del mundo— por encima de sus intereses personales de político... Un acto con riesgos indudables. Pero, sin duda, muy político.

La cuestión está en saber si, tras pasada ya esta fecha, el núcleo de los acuerdos va a adoptarse como estaba decidido o va a ser objeto de nuevos regateos y de saltos atrás. No parece muy posible. El alto el fuego en Indochina no es sólo el fruto de unas negociaciones de Kissinger con los vietnamitas: es, sobre todo, la consecuencia de una política mucho más amplia y más compleja. De una política internacional, en la que intervienen la Unión Soviética y China. Los grandes rasgos del necesario cese del fuego debieron establecerse en la visita de Nixon a Moscú y en la profusa y continua relación de los dos países, que ha cuajado en un gigantesco acuerdo comercial; la visita de Podgorny a Hanoi, en plena ofensiva de Giap y en plena campaña de bombardeos del Norte, estaba sin duda relacionada con todo ello. China desea ardientemente la paz en Vietnam: la guerra obstaculiza su entendimiento con los Estados Unidos y permite que la URSS siga influyendo en la zona. Su influencia sobre Hanoi se ejerce desde hace tiempo, en el sentido de aceptar condiciones honorables. China y la URSS han apoyado de esta forma la campaña electoral de Nixon, con el que tienen ahora la seguridad de ir adelante en las negociaciones. Es indudable que los combatientes vietnamitas han apoyado también a Nixon, al aceptar las negociaciones en los momentos preelectorales. Todas éstas son cosas que no se hacen sin unas garantías adecua-

das de que el objeto de la negociación va a prosperar finalmente. Por otra parte, además de la cuestión de política exterior, hay todo el gran drama interior de Estados Unidos: la crisis de la sociedad, el desajuste de la economía, el profundo malestar de toda índole, que no es necesario subrayar, causado por la guerra de Vietnam en todos los sectores. Antes de la decisión de llegar al alto el fuego, el Presidente —como representante de un grupo de poder— ha tenido que reajustar y reconvertir en proyecto toda la maquinaria industrial y económica del país.

Sin embargo, hay que convenir que un alto el fuego, aun con precisiones futuras tan amplias como las que estipula éste, no es necesariamente una paz. El complejo indochino y, tras él, todo el asiático, es mucho más de lo que cabe en un tratado, y mucho menos un acuerdo provisional. El alto el fuego prevé un periodo de tres meses, durante los cuales los Estados Unidos habrán retirado todos sus militares del país (la urgencia con que están enviando material de guerra en estos momentos indica que quieren dejar bien abastecido al Gobierno de Saigón para cuando llegue ese momento) y Vietnam del Norte habrá devuelto sus prisioneros de guerra. Los Estados Unidos se habrán desentendido (relativo, oficialmente) del caso, y serán los vietnamitas entre sí quienes negocien: pueden llegar o no a un acuerdo, pueden o no reanudarse las hostilidades. En el interin, va a haber continuamente acusaciones mutuas de ruptura del alto el fuego, por los dos bandos. ¿Puede servir una de ellas de pretexto para que la guerra vuelva a incendiarse? Por otra parte, Camboya ofrece un caso distinto, y Laos y Tailandia...

Por eso es interesante insistir en que lo que se está tratando en estos momentos, y parece irreversible a pesar del aparente retroceso —o detención— actual, es un alto el fuego. La paz es otra cuestión. Es una cuestión de muchos años.

■ JUAN ALDEBARAN.